



COMPLIANCE: PERSPECTIVA PLURAL Y FISCAL

Sección editada en colaboración con:



COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL (1)

María del Carmen Cámara Barroso

*Profesora Contratada Doctora en Derecho Tributario
Universidad a Distancia de Madrid*

I. Introducción

Desde 2010, dentro de la Ley Orgánica (en adelante, LO) 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP), en el art. 31 bis, se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas derivada de las conductas realizadas por parte de las personas físicas que las dirigen y de sus empleados (atribución de la responsabilidad por transferencia o de tipo vicarial), dejando atrás desde entonces el tradicional principio *societas deliquere non potest*.

También en dicho art. 31 bis CP se contempla la posibilidad de que dichas personas jurídicas, para quedar exentas de responsabilidad penal, puedan adoptar medidas encaminadas a prevenir la comisión de delitos, lo que comúnmente se conoce como sistemas de *compliance* penal (2).

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la instauración de dichos modelos de *compliance* penal, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, únicamente podía ser considerada como una circunstancia atenuante de la pena.

Entre los delitos que pueden cometerse por las personas jurídicas (y de los que, en consecuencia, estas pueden ser penalmente responsables) nos encontramos con el delito contra la Hacienda Pública (cuyo tipo básico se encuentra regulado en el art. 305 CP), y así aparece recogido en el art. 310 bis CP.

Teniendo en cuenta que la fiscal es una materia especialmente técnica (y que, cada vez más, el protagonismo del contribuyente es mayor, pues, por ejemplo, el sistema de autoliquidación resulta de aplicación en la mayoría de los impuestos de nuestro sistema fiscal), en no pocas ocasiones, especialmente si nos referimos a personas jurídicas de una cierta entidad, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, estas contratarán los servicios de un asesor fiscal.

Desde un punto de vista jurisprudencial, en los últimos años, hemos asistido a una revolución mediática (pensemos, por ejemplo, en el «Caso Messi») en torno al papel que, en la comisión del delito contra la Hacienda Pública (comúnmente conocido como delito fiscal), puede jugar el asesor fiscal.

El delito fiscal, tal y como se encuentra configurado en el art. 305 CP, es un delito especial propio (que, en principio, únicamente podría cometerse por el *intraneus*, esto es, en el caso de este delito, por el obligado tributario). No obstante,